

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Argentina

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Cheresky, Isidoro
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-06-21 18:55:11
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219043

Argentina

Economía hipotecada y poder político fragmentado

Isidoro Cheresky

La evolución de la Argentina hacia mediados de 2001 desafía la capacidad de análisis político y la posibilidad de formular un diagnóstico unificado. Por una parte, el país estuvo al borde de una cesación de pagos que de concretarse hubiera agravado bruscamente la deteriorada situación. Por otra parte, las instituciones políticas se hallan en un estado de sorprendente debilitamiento y fragmentación: la coalición que llegó al poder en diciembre de 1999 ha fracasado al menos desde el punto de vista de sus objetivos originales y de su sustento popular, y de hecho se encuentra en proceso de dispersión. Sin embargo la oposición corre el riesgo de no capitalizar la desafección popular del oficialismo, debido al descrédito de su propia acción de gobierno durante los 90, recuerdo recientemente reavivado por los procesos judiciales por corrupción que condujeron a la cárcel al ex-presidente Menem y a varios de sus colaboradores.

La Argentina es un país endeudado y estancado¹; los compromisos de la deuda han implicado casi la cesación de pagos. Cuando los inversores financieros y productivos consideran que el incremento de la deuda comporta un riesgo mayor –apreciación en la que intervienen consideraciones económicas y políticas directamente relacionadas con el país pero también con las variaciones en los flujos internacionales de capital–, los intereses de los nuevos compromisos se incrementan hasta alcanzar niveles que significan que el país no cuenta con más posibilidad de crédito².

ISIDORO CHERESKY: profesor de Teoría Política Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires; director del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano; investigador del Conicet.

1. Ya van 30 meses sin crecimiento económico. El monto de la deuda externa supera la mitad de su producto bruto anual y ha crecido a un ritmo de 10.000 millones de dólares anuales.
2. Desde marzo de 2001 el índice del riesgo país fue subiendo hasta alcanzar 1.300 puntos (cada 100 puntos, Argentina debe pagar por los préstamos que contraiga 1% más de interés con respecto al punto de referencia, los bonos del Tesoro de Estados Unidos), es decir que se hubiese debido pagar intereses de 18% anual –ello en el supuesto de que hubiese encontrado quien comprara sus bonos. A fines de junio ese índice rondaba 900 puntos.

Palabras clave: procesos políticos, situación económica, elecciones, Argentina.

Emergencia económica y voluntad política

El crecimiento económico se ha visto afectado en parte por la desconfianza de los mercados, crecientemente reticentes a invertir en el mercado financiero o en la actividad productiva. Pero un factor importante en el estancamiento económico ha sido el *handicap* competitivo de las exportaciones en razón de la sobrevaluación del peso, que ha seguido el curso ascendente del dólar en su relación con otras monedas. El estancamiento y la creciente insolvencia para afrontar los compromisos externos reforzó a lo largo de 2000 el consenso en torno de políticas económicas ortodoxas, según las cuales el país debía adaptarse a las expectativas de los mercados, identificados éstos con los potenciales inversores. El requerimiento por excelencia era la reducción del gasto público, con la creencia de que al disminuir el déficit fiscal aumentaría la solvencia y esto inspiraría confianza entre los inversores. Entre tanto, ahora se reconoce que algunas de las medidas de ajuste han acentuado la depresión y la caída de la recaudación impositiva. Lo cierto es que el Gobierno se embarcó en políticas contractivas atento a las señales del mercado pero sin éxito en atraer la inversión.

La reciente reprogramación de la deuda no ha aventado completamente los temores sobre la posible insolvencia argentina, sino que ha planteado como perspectiva más optimista un escenario a largo plazo en el que las posibilidades de estabilización del crédito externo dependerían de un eventual crecimiento económico y del control del gasto público³. Pero la debilidad del Estado no proviene tan solo de la vulnerabilidad externa de la economía. Un aspecto menos puesto en evidencia tiene que ver con su pérdida de autoridad social general, en particular frente a los principales actores económicos internos, lo que se expresa en una «escandalosa evasión» impositiva. En este punto se condensa la dimensión política de la emergencia económica, puesto que el monto anual de los compromisos de la deuda es inferior a la evasión, y sobre todo porque las políticas de ajuste suelen exigir sacrificios de los sectores sociales de menores recursos que perciben el contexto de inequidad en que se regulan los efectos de la crisis.

La inserción subordinada de la Argentina en los intercambios internacionales es un factor permanente que limita y contrarresta los fundamentos democráticos del poder, que residen en el pronunciamiento ciudadano. La dependencia del crédito internacional se traduce en una vigilancia constante

3. En junio de 2001 Argentina realizó un canje de los bonos de la deuda ya contraída por un monto de casi 30.000 millones de dólares, sobre una deuda de 128.000 millones (diciembre de 2000). De este modo se aligeró la carga para el periodo más inmediato: hasta diciembre de 2002 se pagarán 7.800 millones de dólares menos (es decir que la deuda a saldar en este periodo se redujo a menos de 12.000 millones), y hasta fines de 2005 la reducción de los compromisos alcanza poco más de 16.000 millones (sobre un total anterior de alrededor de 67.000). Es decir que el país ganó tiempo y alejó el peligro de la cesación de pagos, pero la deuda refinanciada comprometió intereses del orden de 15% anual (*Suplemento Económico de La Nación*, Buenos Aires, 4/6/01).

de las decisiones nacionales y una incitación adaptativa a los llamados «requerimientos de los mercados». El mundo de las finanzas gira en torno de evaluaciones cambiantes de los valores expresados en bonos, títulos y acciones, que condensan en cifras la resultante de una notable dispersión de los agentes depositarios de ese poder. En consecuencia, no se trata simplemente de satisfacer los requerimientos de uno o varios acreedores definidos puesto que no existe tal sujeto, pero sí de tomar en cuenta esos requerimientos difusos o, en todo caso, si se tiene mayor voluntad política, de formular políticas que puedan aliviar su capacidad de sanción o eventualmente inducir a la reconsideración de sus evaluaciones. En esta naturaleza contingente de los actores financieros reside también la capacidad de encontrar un margen para decisiones nacionales que no sean ortodoxamente adaptativas.

Lo sorprendente del reciente giro de los acontecimientos es que no han sido ni los líderes políticos del centroizquierda ni los economistas afines, sino el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien ha ilustrado la posibilidad de orientaciones económicas alternativas y ha ampliado el margen político. Pocas semanas después de su nombramiento se puso en evidencia hasta dónde se puede explotar el ejercicio del poder de Estado. Aunque ha creado algunos nuevos impuestos destinados a paliar el déficit —el principal de ellos concierne a las operaciones bancarias y no alcanza esencialmente a los sectores de menores recursos— ha relegado la receta clásica de ajuste en el sector público en provecho de una aproximación heterodoxa. Su estímulo al crecimiento industrial ha recurrido a la injerencia pública en las tasas aduaneras para importaciones y exportaciones hasta, más recientemente, tocar el tabú de la convertibilidad al crear un cambio diferencial para las importaciones y exportaciones⁴.

Pero los condicionamientos del capital financiero no solo han encontrado cierta resistencia en el nuevo ministro sino que más en general han tenido su contrapeso social, puesto que las fuentes ciudadanas del poder, más próximas a la legitimidad democrática, están lejos de estar inactivas. Aunque los ciudadanos están mayoritariamente compenetrados de las restricciones propias de la situación de la Argentina en el mundo y en consecuencia son remisos u hostiles a la contestación extrema que enarbola banderas de ruptura (no pago de la deuda externa, reclamos sectoriales que no toman en cuenta el déficit fiscal, etc.), se han mostrado en cambio reacios a la aplicación sin más de «políticas de ajuste» y tienen una creciente expectativa de políticas que incorporen una dimensión de justicia social. De hecho el curso reciente de los acontecimientos

4. Se había enviado al Congreso un proyecto de ley, todavía no sancionado, que «ampliaba» la convertibilidad del peso al establecer una equivalencia entre la moneda nacional y una canasta en la que por el momento se incluía una proporción de dólar (50%) y una de euro (50%). Pero esta ley solo entraría en vigor cuando tales monedas estuviesen en paridad entre ellas. Recientemente se ha introducido por decreto un factor de «empalme» según el cual cada peso operado en las exportaciones e importaciones sería equivalente a 1,08 dólares, anticipando el efecto favorable a los productos argentinos que tendría la convertibilidad ampliada.

tecimientos, incluyendo tanto la precipitada renuncia del fugaz ministro de Economía Ricardo López Murphy como la orientación económica adoptada por Cavallo, son ilustraciones del peso que tiene la opinión –generalmente figurada por los sondeos– en las decisiones, contrarrestando, al menos en parte, las presuntas demandas de los mercados⁵. Otras expresiones sociales provienen de acciones más parciales o marginales. Se destacan los reclamos de los sectores más empobrecidos, a través del corte de rutas, de subsidios al desempleo o de provisión de alimentos. Esta modalidad disruptiva se ha hecho frecuente y en general es tolerada porque más allá del número limitado de participantes se la considera reflejo de la verdadera situación social.

Las instituciones políticas en la picota

La actual inestabilidad política está signada por el fracaso de la experiencia centroizquierdista encarnada por la Alianza. El endeble sustento del poder presidencial, la fragmentación de las instituciones representativas en las que se forman mayorías circunstanciales y por sobre todo la desidentificación de los ciudadanos con las principales fuerzas políticas, son los rasgos de esta situación. En cuanto al estado de la opinión, no se trata de un descontento pasajero o dirigido simplemente hacia una fuerza en particular. La Alianza se ha desacreditado porque una parte importante de su electorado original le reprocha el incumplimiento de las promesas electorales, agravado en cierto modo por la ineficiencia política y de gestión gubernamental. La coalición gobernante se ha dispersado por la incapacidad de encontrar una *modus vivendi* apropiado para unir la diversidad de sus componentes: una inflexión se produjo en septiembre de 2000 con la renuncia del vicepresidente, Carlos «Chacho» Álvarez, entonces jefe del Frepaso –uno de los dos partidos de la coalición. Las fuertes disidencias en torno del cuestionamiento de la corrupción política con el fondo de una política económica de ajuste que afectaba a los sectores de menos recursos y no era exitosa en su propósito de reactivar la economía, se expresaron en la fisura en la cúspide de la Alianza gobernante, que se iría profundizando en los meses siguientes. Las críticas se amplificaron no solo entre el Frepaso y la UCR sino en el interior de estas fuerzas, de modo que con el nombramiento ministerial de Cavallo, en marzo de 2001, y con la consiguiente modificación del régimen político, hubo desprendimientos en el Frepaso así como un sector del radicalismo pasó a una solapada oposición. Desde entonces se produjo una verdadera recomposición política, el debilitamiento del presidente y la fragmentación de las fuerzas gobernantes⁶. Es cierto que el peronismo, por su parte, está dividido en sub-bloques –45 diputados en torno del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf y el ex-candidato presidencial Eduardo Duhalde; 40 que responden a los gobernadores José Manuel de la Sota y

5. López Murphy, militante radical de larga data, llegó a Economía en marzo de 2001 con un programa de reducción del gasto público de 1.860 millones de pesos, apuntando al gasto educativo y a algunos subsidios provinciales. Debió abandonar el cargo a los pocos días de asumir ante una ola de reacciones sociales.

6. Cuando en diciembre de 1999 la Alianza se hizo cargo del Gobierno su poder institucional era problemático. Con 122 diputados estaba cerca de la mayoría en la Cámara de diputados

Carlos Reutemann; y 15 leales al ex-presidente Carlos Menem, pero esta fragmentación tiene, al menos por ahora, una significación menor que los desprendimientos del oficialismo –traducidos en algunos casos en organizaciones políticas alternativas que competirán en las próximas elecciones legislativas de octubre o noviembre, donde se renovará parcialmente la Cámara de diputados y se elegirá completamente una nueva Cámara de senadores.

Ante la nueva situación, el Gobierno quedó sostenido por la convergencia entre los partidarios propios del presidente y el cavallista Acción por la República (AR)⁷. El Frepaso se encuentra en estado de disgregación pese a que la conducción de algunos gobiernos locales, entre ellos el de la ciudad de Buenos Aires, procura un sustento institucional a alguno de sus líderes. Los diputados ya alejados y quienes amenazan con hacerlo próximamente representan un tercio del caudal previo a la crisis. Pero el golpe más significativo ha sido la salida del propio Alvarez, lo que ha privado al Frepaso del aglutinamiento personalista de su principal referente. En la última recomposición ministerial un representante del Frepaso se ha incorporado al gabinete, pero de todos modos se ha atrincherado en su tarea específica.

El actual sustento presidencial hubiese sido insuficiente sin el acuerdo implícito y más amplio, por parte de la mayoría de los actores políticos, de mantener la estabilidad del sistema. Aunque el llamado a la unidad nacional formulado en los momentos críticos y ulteriormente reiterado por el presidente no tuvo mayor eco en términos de la conformación del gabinete, un clima político de moderación involucra a los principales actores. Esta moderación tiene bases paradójicas. Por una parte, los principales dirigentes políticos se mantienen a distancia de la protesta social más intensa, percibiendo que su traducción política directa no acarrea popularidad; por otra parte, son sensibles a la difusa manifestación del humor social, que si bien afirma un gran descontento es refractario a la desestabilización institucional y al aprovechamiento faccional de la crisis y de la debilidad presidencial. Por otro lado, si bien es notoria la debilidad de la figura presidencial, las competencias del Ejecutivo han aumentado significativamente con la aprobación de la Ley de Competitividad, que le delega considerables capacidades legislativas. Esta apa-

(129 representan la mayoría simple) pero era muy minoritaria en el Senado donde el peronismo tenía una bancada numerosa. Sus adversarios controlaban también los gobiernos de las principales provincias. Hoy el bloque de diputados de la Alianza se ha reducido a 109 miembros. El Frepaso vio desertar a 9 de sus legisladores y el radicalismo a 4. Un sub-grupo de 6 legisladores del Frepaso puede alejarse de su propia fuerza y del bloque de la Alianza en un futuro próximo, con lo que la superioridad parlamentaria del oficialismo sobre la oposición se haría mínima.

7. El ala del radicalismo caracterizada como progresista y representada por Federico Storani, quien fuera ministro del Interior hasta la llegada de Cavallo al Gobierno, se colocó en una posición crítica planeando la recomposición de una Alianza sobre nuevas bases y de hecho desde una oposición solapada pero que promete ser abierta. El propio ex-presidente Alfonsín, principal dirigente del radicalismo y candidato a senador en las próximas elecciones, fue hostil a la incorporación de Cavallo y se mantiene en una posición crítica al Gobierno, aunque atemperada por su preocupación de no desestabilizarlo. En resumen, las bases del presidente en su propio partido son casi inexistentes.

rente contradicción no es tal: se ha constituido un nuevo centro de poder en torno de la figura de Cavallo, que aparece liderando las principales decisiones. El nuevo dispositivo ha sido interpretado por algunos observadores en términos de un desplazamiento institucional: se trataría de un ministro de Economía actuando como primer ministro y de un presidente distante de las decisiones cotidianas y evocando, por su función más protocolar, una figura de monarca constitucional.

Los partidos políticos fueron sacudidos por la irrupción del nuevo liderazgo de Cavallo, que los dividió en momentos de someter a votación parlamentaria la Ley de Competitividad, redistribuyéndolos en los bandos de quienes lo apoyaban aun a regañadientes y quienes lo repudiaban, logrando una mayoría transpartidaria para obtener los poderes legislativos especiales. En verdad, la distinción entre Gobierno y oposición peronista tiende a diluirse con frecuencia. Como en el caso de la Ley de Competitividad, los alineamientos son transversales y en otros casos los representantes pueden actuar como una corporación, pero cuando se aproximan las fechas electorales se produce una recuperación del espíritu partidario, si bien persisten otras formas de transversalidad⁸. En vista de las próximas elecciones legislativas, AR ha encarado tratativas sin tomar en cuenta el clivaje Gobierno/oposición con el objeto de lograr alianzas locales haciendo uso de su atractivo como tercera fuerza, incrementada ahora por la nueva popularidad de su líder. Aunque parece mantener su caudal de simpatías –lo que le daría el triunfo–, el peronismo no ha podido beneficiarse con el descrédito de la Alianza gobernante. Ello se debe, en parte, a que al fracaso del centroizquierda se suma el descrédito de toda la clase política: los desilusionados de la Alianza se han desilusionado de la política o simplemente están disponibles para nuevos horizontes⁹. Por otra parte, con el tiempo se fue acentuando una imagen negativa del último gobierno peronista. El voto mayoritario en las elecciones de 1999 expresó un rechazo al presidente saliente, Carlos Menem, proveniente de los críticos del decisio-

8. De hecho cada vez más los partidos actúan con estrategias desagregadas en los ámbitos provinciales y locales. En las elecciones nacionales de 1999, por ejemplo AR, que tenía candidato presidencial, incorporó en sus propias boletas al candidato a gobernador de su rival peronista en la provincia de Buenos Aires. En Mendoza esos mismos partidos participaron de un trueque inverso: AR fusionó sus listas de diputados nacionales con la del peronismo ocupando la cabecera de la lista.

9. La dispersión electoral y la simpatía por los liderazgos disidentes según los sondeos de opinión es notable sobre todo en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, que suelen ser distritos precursores de los cambios en el humor ciudadano. En Capital la diputada Elisa Carrió, en ruptura con el radicalismo y en abierta oposición al Gobierno y eventual candidata a senadora, reúne 61% de aceptación y 39% de intenciones de voto, en tanto que el socialista Alfredo Bravo, también en ruptura con la Alianza, reúne 33% de simpatías, cerca del propio jefe de Gobierno de la ciudad, el dirigente frepasista Aníbal Ibarra, con 38% de simpatía y 19% de intenciones de voto. En la provincia de Buenos Aires entre los políticos con más imagen positiva están el cura Luis Farinello y el ex-comisario Luis Patti, junto a Eduardo Duhalde del PJ y Juan Pablo Cafiero del Frepaso. En esta provincia los pronósticos presumen un triunfo del PJ, pero el segundo lugar parece disputado entre la Alianza, de todos modos en una posición crítica al Gobierno nacional, y expresiones políticas de protesta social o de reclamos de seguridad con rasgos autoritarios (encuesta del Centro de Estudios de la Opinión Pública, en *Clarín*, Buenos Aires, 17/6/01).

nismo y de la presunta corrupción gubernamental, y de los opositores al «modelo económico». El entonces candidato peronista, Eduardo Duhalde, aunque distanciado de la gestión de la que había formado parte, no logró acreditar su virtual distancia como para no verse también afectado por el voto de condena. Pues bien, el rechazo a ese gobierno se ha reactivado y ampliado. Pese a que Alianza no tomó la iniciativa de promover investigaciones judiciales sobre los numerosos ilícitos y sospechas de corrupción que involucran a funcionarios del anterior gobierno, éstas se adelantan por iniciativa de los jueces, llevando a la cárcel a un representativo grupo de antiguos funcionarios, entre ellos al ex-jefe del Estado Mayor del Ejército y al mismo Menem. El descrédito del gobierno menemista no hace sino acentuar la división existente en el peronismo ya no entre dos bandos, sino entre múltiples líderes entre los que se cuenta el ex-presidente y los gobernadores de las principales provincias con aspiraciones para los comicios de 2003.

A la vez, la fragmentación que afecta a las principales fuerzas políticas también se expresa en la emergencia de liderazgos de opinión dirigidos a capitalizar la actual crisis de representación. Anclada a las sucesivas frustraciones producidas por el actual y el anterior gobierno, esta crisis tiene un sustento más general en la disociación entre las expectativas de la ciudadanía y el consenso conformista de la clase política, que se revela incapaz de transformar sus cuestionadas prácticas y de concebir políticas no meramente adaptativas a los requerimientos externos. Los líderes y las fuerzas políticas con posibilidades de gobernar se ven tentados de esbozar el discurso de la «razonabilidad». Esto es así no solo porque la ortodoxia adaptativa parece ineludible para que un gobierno no colapse en sus primeros pasos, sino también porque ante la opinión pública los discursos de ruptura no resultan verosímiles.

A reculones, haciéndose eco de un clima de descontento con las instituciones y los liderazgos tradicionales, partidos políticos y representantes parlamentarios se ven llevados a encarar la meneada reforma política. El tema explícito de ésta es el costo y financiamiento de la política, y lateralmente, el de los dispositivos de la representación. Aunque el tratamiento parlamentario de la reforma parece condenarla a un alcance reducido, se han producido por otro lado algunos gestos de purga voluntaria –como reducciones de salarios de altos funcionarios e integrantes de cuerpos legislativos– que ilustran la presión ahora amplificadas que ejerce la opinión pública, acompañada por la revelación, a través de los medios, de los índices de ingresos y privilegios de que disponen los representantes. Estas reformas son seguramente razonables, pero ponen en evidencia un descontento cuyo epicentro es la inhibición política existente. El despilfarro y la lejanía de los representantes es tanto más insoportable cuanto que la política aparece como impotente ante los poderes fácticos y la fragmentación de intereses.

Otro estímulo a la recomposición institucional proviene de la depuración y reactivación de la justicia, en particular de la federal, sospechada de connivencia con el poder durante la década pasada, que parece estar ahora en pro-

ceso de renovación. Una mayor eficiencia y transparencia judicial están en la base de la ya mencionada investigación sobre algunos negociados en los que se presume involucrado el núcleo gobernante durante ese periodo. Estas actuaciones se suman a las emprendidas en los últimos años contra los jefes de la última dictadura militar, quienes habiendo sido amnistiados en 1990 han vuelto a una situación carcelaria hacia fines de la década. Si estos procesos siguen un curso legal y no se ven frustrados por interferencias políticas se habrá asentado, dentro de un clima general de escepticismo político, al menos cierta confianza respecto al pilar del ordenamiento republicano: la igualdad ante la ley.

Horizonte incierto

La economía y la justicia social. Las posibilidades de una salida a la crisis sin mayores costos son limitadas y en todo caso no inmediatas. Si, como parece ser, continúan las dificultades por las oscilaciones del llamado «riesgo país», se van a acentuar las tensiones entre una orientación ortodoxa que reclama una fuerte reducción del gasto público y una tendencia más heterodoxa que si bien no puede ignorar a los mercados tratará de tener sustento en primer lugar en la recuperación del crecimiento económico con la esperanza de salir por esa vía del actual estancamiento.

Una eventual cesación de pagos se excluye de este análisis no porque sea imposible que ello ocurra, aunque su probabilidad inmediata ha disminuido, sino porque la reestructuración a un nivel inferior de recursos que sobrevendría tendría consecuencias hoy impensables. Pero en caso de que la emergencia se prolongue y la salida sea lenta, no parece factible contar con un disciplinamiento social como el que existió durante la situación hiperinflacionaria de comienzos de los años 90. Está por cierto la reacción desesperada de los excluidos que no debe subestimarse, por el momento espectacular aunque limitada. En cuanto a la mayoría de los ciudadanos, están imbuidos de un espíritu en el que pueden reconocerse dos componentes: por una parte, un sentido del bien colectivo que viene afirmándose desde los años 80 y que supone una creciente conciencia de los problemas comunes y de las dificultades de la inserción de la Argentina en el mundo. La consecuencia de ello es la disposición a hacer sacrificios cuando parecen justificados y la reticencia a apoyar reclamos sectoriales cuando parecen amenazar el equilibrio general. Por otra parte, la convicción de que el bien común y en particular la adaptación a las restricciones externas no puede dejarse solo en manos de los expertos, y que los saberes técnicos no pueden prevalecer sobre la experiencia colectiva y la liberación democrática.

Esta opinión pública es muy distinta a la de los 90, cuando parecía que la simple fórmula de la apertura y la liberalización económica prometían crecimiento y bienestar. La experiencia de las privatizaciones ha producido un vuelco hacia expectativas de necesaria intervención y regulación estatal; para muchos sectores los problemas sociales deben ser encarados a través de polí-

ticas públicas. Esta nueva sensibilidad se expresa por ahora pasivamente en una inusitada tolerancia ante los conflictos. En este contexto es poco probable que la emergencia económica pueda ser encarada con medidas que descuiden los requerimientos de justicia social.

La recomposición política posterior a las próximas elecciones. La fluidez en los realineamientos políticos parece ser una tendencia de largo plazo en la vida política. Sus condicionantes más ostensibles son el debilitamiento de las estructuras partidarias, la autonomía ciudadana y en particular la fluctuación en el voto. En este contexto las próximas elecciones legislativas pueden implicar un considerable desafío para la estabilidad política. A menos que se produzca una decisiva reversión de las tendencias, el oficialismo sufrirá una aplastante derrota, con lo cual la UCR quedará en minoría en ambas Cámaras¹⁰. A esto debe agregarse que podría emerger un sector ni opositor ni oficialista, compuesto por representantes de la Alianza elegidos a partir de posturas críticas respecto del Gobierno, pero pertenecientes a la coalición gobernante.

Aunque el Gobierno sufra una contundente derrota, el éxito de la oposición peronista no será equivalente. Las terceras fuerzas y los candidatos disidentes encontrarán un inédito eco electoral, a lo que debe sumarse el interrogante sobre el grado en que las elecciones se nacionalizarán o darán mayor cabida a identificaciones locales. La centralidad política de Cavallo –que siendo miembro del Gobierno orienta a su partido hacia coaliciones disociadas de esa circunstancia– puede estimular un voto no identificable con los clivajes Gobierno/oposición.

Sin duda el escenario poselectoral no puede ser definido antes de las elecciones; sin embargo parece evidente que se planteará la constitución de un gobierno sobre nuevas bases. Cuáles sean éstas dependerá no solo de los alineamientos y resultados electorales sino también de la suerte del programa económico en ejecución. La especulación sobre un gobierno de unidad nacional que incorpore a sectores del peronismo manteniendo la exclusión de los socios fundadores de la Alianza está a la orden del día, aunque existen fuerzas que actúan a favor de la reconstitución de la Alianza original y de la reorientación progresista del Gobierno.

Un peligro de esa escena aún inescrutable es que los requerimientos de la gobernabilidad promuevan articulaciones pragmáticas que acentúen la inacción. Este tipo de compromisos podría bloquear las iniciativas orientadas a efectivizar la reforma política y la lucha contra la corrupción así como a establecer políticas de reparación social. La inmovilidad bajo la fachada de un gobierno de unidad nacional, independientemente de lo abarcativo que fuera, correría el riesgo de acentuar el incipiente divorcio entre los representantes políticos y la ciudadanía.

10. Con todo podría ser que mejore su situación en el Senado a consecuencia del cambio en el dispositivo de representación para ese cuerpo.

El futuro del centroizquierda. El fracaso de la Alianza es el del proyecto del centroizquierda que impulsaron desde agosto de 1997 Chacho Alvarez y Raúl Alfonsín. La coalición se inició como un pacto electoral y aunque logró cierta integración entre las fuerzas aliadas, no superó ese estadio inicial ni pudo avanzar profundizando una alternativa de poder o generando un movimiento social que arraigara en una cultura de «reformismo aggiornato». De hecho se convirtió en el receptáculo del rechazo social al gobierno de Menem, pero manteniendo la heterogeneidad de sus partidarios y electores: una vertiente más preocupada por la calidad institucional de la democracia buscaba condenar el decisionismo, la frivolidad y ostentación de los funcionarios y la corrupción; otra, en cierto sentido más tradicional y social, rechazaba esencialmente el modelo económico y sus consecuencias sociales.

Esa convergencia se produjo en las elecciones legislativas de 1997 y generó la esperanza de consolidar una nueva relación de fuerzas que provocara la alternancia en el poder. Lo esencial de la estrategia de la Alianza consistió en preservar ese electorado original fomentando el antimemenismo como casi único emblema. Para mantener la armonía entre los partidos asociados y no perturbar a su heterogéneo electorado, se estableció un régimen de interdicción deliberativa durante las primarias abiertas en que disputaron la candidatura presidencial Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide. Que el radicalismo eligiera a De la Rúa para representarlo en la postulación y que éste consiguiera tanto apoyo en las internas abiertas es ilustrativo del predominio de un liderazgo de popularidad por sobre los candidatos acreditados en su implantación partidaria¹¹. Este estilo de promesa mínima y silenciamiento de la diversidad de la Alianza dominó también la campaña presidencial. Aunque la fórmula había sido pensada como un atractivo equilibrio para el centroizquierda, la campaña fue casi exclusivamente protagonizada por De la Rúa, acompañado de recursos audiovisuales.

Como se ha señalado, la acción del gobierno aliancista desde diciembre de 1999 estuvo signada por el intento de sacar a la economía de la recesión y el déficit fiscal, tarea a cargo de un equipo de economistas considerados progresistas, pero que quedaron prisioneros de la sospecha de heterodoxia, lo que les indujo a una prudencia inhibitoria de apartarse del libreto escrito por los organismos internacionales. Las sucesivas medidas de ajuste, vergonzantes en tanto fueron presentadas como concesiones a los requerimientos de los mercados o de los organismos, carecieron de una justificación pública que les diera un sentido político compatible con las expectativas de justicia social. Igualmente estruendoso y más grave para la coalición fue su incapacidad de afrontar la moralización de las instituciones y la vida política. El episodio decisivo

11. De la Rúa fue considerado el candidato ideal de la Alianza antes de las elecciones primarias que lo consagraron, en razón de sus altos índices de popularidad que encajaban perfectamente con la expectativa antimemenista de la opinión pública. Su moderación, parquedad y austeridad encarnaban las antípodas del estilo de gobierno que se buscaba desalojar. Sin embargo De la Rúa tenía un arraigo limitado en su propio partido donde era considerado representante del ala conservadora.

tuvo como escenario el Senado. A partir de un comentario periodístico y de un anónimo, un par de senadores y el propio presidente del cuerpo (Alvarez en su calidad de vicepresidente) se hicieron eco de una denuncia de sobornos para la aprobación de una ley enviada por el Ejecutivo, y emprendieron una acción de esclarecimiento que pronto se vio bloqueada por la resistencia de la inmensa mayoría de los senadores. El propio Gobierno estaba cuestionado por la denuncia, puesto que se presumía que los sobornadores integraban el gabinete nacional. Alvarez lideraba la acción de denuncia, destinada a convertirse en una ilustración de las prácticas partidarias habituales, por lo que su develación y sanción podía convertirse en el inicio de una verdadera transformación de la cultura política y de práctica reforma institucional.

En la fase inicial del escándalo se presumía que De la Rúa daba un apoyo implícito a su vice, pero al cabo su prolongado silencio concluyó con una reorganización ministerial en la que los funcionarios sospechados fueron ratificados o promovidos a funciones más relevantes. Ante esta ostensible desautorización, Alvarez renunció provocando el alejamiento de los funcionarios cuestionados. Pero este hecho imprimió un curso irreversible a la escisión en la coalición gobernante. En la reorganización del gabinete de marzo de 2001, que llevó a Cavallo al Ministerio de Economía, se especuló por un momento en una rearticulación promovida por éste que reconstituyera la Alianza con un mayor peso del centroizquierda, llevando a Alvarez a la jefatura del gabinete, pero finalmente por una intervención del propio presidente, la incorporación de Cavallo estuvo acompañada por el retiro de los sectores caracterizados como progresistas.

Desde el inicio del Gobierno el centroizquierda ha participado esperando que pasara la fase de recuperación económica y lanzarse entonces a las grandes reformas esperadas. Pero ese día no llegó y la corriente quedó simplemente asociada a una acción gubernamental empeñada en la preservación del *status quo*, lo que se puso particularmente en evidencia cuando el proyecto de Cavallo le robó a los sectores progresistas, parcialmente, un libreto que éstos no se habían atrevido a ejecutar y ni siquiera a enunciar. Los líderes y organizaciones del centroizquierda, perfilados desde 1994 como una reacción al pacto de Olivos, aparecen ahora desacreditados. Sin embargo, su reconstitución está abierta como posibilidad sobre todo por la persistente sensibilidad de la ciudadanía. Pero para recobrar nueva vida debería percatarse de la magnitud del desafío que significa construir una alternativa política a la vez que arraigarla en una cultura cívica reformista de frágil presencia.

Buenos Aires, junio de 2001